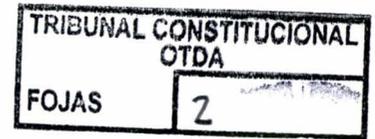




TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N° 5068-2014-PA/TC
LIMA
COLEGIO ODONTOLÓGICO
DEPARTAMENTAL DE PIURA

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de mayo de 2016

ASUNTO

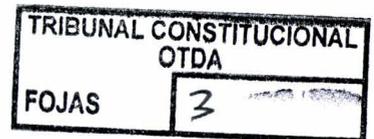
El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Colegio Odontológico Departamental de Piura contra la resolución de fojas 145, de fecha 19 de junio de 2014, expedido por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá una sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concorra alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando:
 - a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
 - b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
 - c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.
 - d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso carece de esta cualidad cuando no está referido al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.
3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial trascendencia constitucional (1) si una futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se trata de un asunto al que no le corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento de fondo.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N° 5068-2014-PA/TC
LIMA
COLEGIO ODONTOLÓGICO
DEPARTAMENTAL DE PIURA

4. En el presente caso, el apoderado de la entidad demandante solicita la nulidad de las resoluciones 104 y 112 de fecha 25 de noviembre de 2011 y 12 de marzo de 2011, respectivamente, expedidas por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, en el Expediente 22564-2007; así como de la Resolución 07 del 4 de marzo de 2013, a través de la cual la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la Resolución 112 antes citada. Refiere el apoderado que, en la etapa de ejecución forzada en el proceso de Ejecución de Acta de Conciliación, se expidió la Resolución 104, en ella se condiciona la entrega del certificado del depósito judicial a la previa adecuación de su representada al Decreto Supremo 014-2008, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución pues, dado que el proceso se inició el 27 de mayo de 2007, se debía aplicar la Ley 15251, la Ley 29016 y el Decreto Supremo 280-65-DGS. Este criterio fue reiterado al dictarse la Resolución 112 (considerandos duodécimo y décimo tercero) y al emitirse la Resolución 07, lo que consideran que afecta la garantía de la cosa juzgada, pues el acta de conciliación tiene dicha condición, así como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva al impedírsele el cobro de su acreencia en tanto no se adecúe al Decreto Supremo 014-2008.
5. En el caso de autos, cabe señalar que las resoluciones 104, 117 y 07 (entre noviembre de 2011 y marzo de 2013) fueron expedidas cuando se encontraban vigentes no solo la Ley 29016 (13 de mayo de 2007), sino también el Decreto Supremo 014-2008-SA que aprueba el reglamento de aquella (26 de junio de 2008).
6. Además, la actuación del juzgador de establecer un requisito para el endoso del certificado de depósito judicial, se encuentra sustentado en que, conforme se expone en la Resolución 112: **a)** la parte actora, al subsanar su demanda, mencionó que el Colegio Odontológico del Perú así como los colegios odontológicos departamentales fueron creados por la Ley 15251, por lo que su naturaleza institucional es la de una persona jurídica de derecho público interno (sétimo considerando); **b)** en su escrito de subsanación señaló que la mayoría de colegios odontológicos departamentales no cuentan con documento de constitución ni ficha o partida electrónica, por lo que sus órganos de gobierno y funcionamiento están regulados por el reglamento de la Ley 15251, entre otros; este argumento es reiterado en su escrito del 15 de abril de 2008, reafirmando su naturaleza jurídica institucional adjuntando la Ley 29016, con lo que dicha parte, para presentar la demanda y acreditar su legitimidad así como la de su representación señalan un sometimiento a las disposiciones correspondientes a las personas jurídicas de derecho público interno (considerando octavo); **c)** concluido el proceso en primera instancia, la actora refiere que es una asociación de carácter privado regida por las disposiciones del Código Civil, por lo que no se le puede aplicar la Ley 29016 o su reglamento (considerando noveno); **d)** ante el mandato contenido en la Resolución 104 respecto a la adecuación de la actora a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 014-2008-SA, refiere que se ha variado su situación jurídica, que no es una persona jurídica de derecho público



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 5068-2014-PA/TC
LIMA
COLEGIO ODONTOLÓGICO
DEPARTAMENTAL DE PIURA

interno, sino una asociación privada regida por normas de naturaleza civil, siendo necesario para el juzgador que la persona jurídica que demandó sea la misma a la que se le deberá entregar el depósito judicial (duodécimo considerando); y e) el juzgador hace presente que su actuación tiene por objeto garantizar que la relación procesal que inició el proceso se mantenga hasta que se ponga fin a la controversia o se ejecute lo que en ella se generó, por lo que se hace necesario hacer alusión al Decreto Supremo 014-2008-SA (décimo tercer considerando); por ello, considera que la Resolución 104 mantenga su vigencia (décimo cuarto considerando). Por su parte, la Resolución 7, en vía de apelación confirma el contenido de la Resolución 112, precisando que la exigencia hecha a la parte actora —teniendo en cuenta su propia actuación—, no desnaturaliza el proceso ni resulta prevaricadora, sino que, únicamente, le exige que cumpla la ley (considerando cuarto, párrafo cuarto).

7. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional advierte que toda la controversia de autos está relacionada con determinar si en el proceso subyacente cabía o no la aplicación del Decreto Supremo 014-2008 y si dicha aplicación afectaba lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución; o si, por el contrario, debía seguirse aplicando la legislación vigente al momento de iniciarse el proceso, esto es, la Ley 15251 y el Decreto Supremo 280-65-DGS.
8. En primer término, para este Tribunal, la determinación de la normatividad aplicable a un caso concreto por parte de la judicatura común es una competencia que corresponde a los jueces de aquella y no al juez constitucional, salvo arbitrariedad manifiesta, la que no se constata en autos. Por el contrario, se advierte que ambas disposiciones se encontraban vigentes al momento en que fueron aplicadas a la parte actora, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 109 de la Constitución, resultan plenamente aplicables al caso subyacente, sobre todo, cuando resulta necesario que en los procesos judiciales la titularidad de las partes quede plenamente acreditada, durante todo el séquito del proceso, incluida su ejecución.
9. En ese sentido, se advierte que la intención del demandante es continuar en sede constitucional el debate cerrado en sede ordinaria, pretendiendo que el juez constitucional sustituya al juez ordinario y emita un pronunciamiento favorable a sus intereses, lo que no solo no es de competencia del Tribunal Constitucional, sino que, además, convertiría a este Tribunal en una *supra* instancia de la judicatura ordinaria, lo que en modo alguno está permitido por nuestro ordenamiento.
10. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 9 *supra*, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	5

EXP. N° 5068-2014-PA/TC
LIMA
COLEGIO ODONTOLÓGICO
DEPARTAMENTAL DE PIURA

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE, con la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, llamado a dirimir ante el voto singular adjunto del magistrado Blume Fortini,

Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

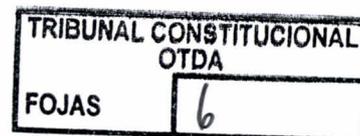
**LEDESMA NARVÁEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaria Relatora
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 05068-2014-PA/TC

LIMA

COLEGIO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTAL DE PIURA

Representado por JUAN EDUARDO

MORALES LAZO - APODERADO

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI

Discrepo, muy respetuosamente, de la decisión contenida en la resolución de mayoría. Considero que si se opta por dictar en el presente proceso una sentencia interlocutoria denegatoria, invocando el precedente vinculante contenido en la STC N° 00987-2014-PA/TC (conocido como precedente Vásquez Romero) y éste fuera aplicable, no corresponde declarar improcedente el recurso de agravio constitucional, sino entrar al fondo del asunto y evaluar la pretensión contenida en la demanda, a los efectos de determinar si la misma se encuentra dentro de los supuestos consagrados en dicho precedente.

Las razones que sustentan mi posición son las siguientes:

Marco constitucional y legal para acceder al Tribunal Constitucional como última y definitiva instancia constitucional en la jurisdicción nacional.

1. La Constitución Política del Perú ha consagrado, en el inciso 2) de su artículo 202º, que el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas por el Poder Judicial en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; habilitando de tal forma al demandante a acceder al máximo órgano de la justicia constitucional, sin más condición que éste se halle ante una resolución denegatoria de segundo grado.
2. Complementando tal propósito habilitador de acceso al Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional en su artículo 18º reguló el recurso de agravio constitucional a favor del demandante, como el instrumento procedimental idóneo para impugnar la resolución denegatoria a su pretensión dictada en segundo grado por el Poder Judicial, sea que éste haya declarado improcedente la demanda o que haya declarado infundada la demanda, sin más requisito para su concesión y procedencia que se trate de una resolución denegatoria y que se interponga dentro del plazo de diez días de notificada.
3. Ratificando esa línea habilitadora de acceso al Tribunal Constitucional, el mismo código adjetivo constitucional introdujo en su artículo 19º el recurso de queja por denegatoria de recurso de agravio constitucional, el cual permite al demandante cuestionar ante el propio Tribunal Constitucional aquella resolución dictada por el Poder Judicial que haya denegado o rechazado tal medio impugnatorio, a fin que el Tribunal Constitucional haga una revisión de la declaración de improcedencia cuestionada, en la línea de brindar una mayor garantía al justiciable y, eventualmente, rectificar la decisión a favor del demandante, si se detecta que la denegatoria careció de fundamento.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 05068-2014-PA/TC

LIMA

COLEGIO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTAL DE PIURA

Representado por JUAN EDUARDO

MORALES LAZO - APODERADO

4. Por tanto, dentro de la lógica de la justicia finalista, amparista y antiformalista que informa el acceso al Tribunal Constitucional, así como las instituciones procesales reguladas por el Código Procesal Constitucional, no cabe establecer requisitos de procedencia adicionales a los dos señalados y, menos aún, sostener que al Tribunal Constitucional le compete determinar la procedencia del recurso de agravio constitucional, salvo el caso de su intervención residual vía queja por denegatoria del mismo para procurar su concesión.
5. Es decir, la concesión y, por tanto la calificación de la procedencia del recurso de agravio constitucional, es una competencia del Poder Judicial, ejercida a través de las Salas de sus Cortes Superiores encargadas de conocer en segundo grado los procesos que nos ocupan, cuando hayan dictado resoluciones denegatorias a la pretensión del demandante, por ser improcedente o infundada la demanda, según el caso, que permite acceder al Tribunal Constitucional, a los efectos que, como última y definitiva instancia (como instancia de grado) defina la controversia.
6. Por tanto, una vez abierta la puerta de acceso al Tribunal Constitucional vía la concesión del recurso de agravio constitucional, lo cual significa acceder a una instancia de grado, que, además, es última y definitiva en la jurisdicción nacional, no cabe que el Tribunal Constitucional califique la procedencia o improcedencia del citado recurso, por cuanto aquél viene ya calificado y concedido por la segunda instancia judicial; el Tribunal Constitucional no tiene competencia para entrar a dicha calificación y, si lo hiciera, estaría volviendo a calificar en perjuicio del justiciable demandante un recurso ya calificado y concedido; a contracorriente de la lógica finalista, amparista y antiformalista antes referida, y violando su derecho de acceso a la justicia constitucional especializada en instancia final y definitiva en la jurisdicción interna. Más aún, si la expedición de la sentencia interlocutoria denegatoria se produce sin vista de la causa.

Descargar sin desamparar, desguarnecer ni abdicar. La correcta interpretación del precedente Vásquez Romero.

7. En armonía con lo dicho hasta aquí, cualquier intento de descarga que asuma el Tribunal Constitucional si observa que existen causas manifiestamente improcedentes o infundadas, que debieron merecer una descalificación desde un inicio, por no darse los supuestos elementales que habilitan la generación de un proceso constitucional, no pasa por descalificar el recurso de agravio constitucional ya concedido, sino por emitir un pronunciamiento desestimatorio, que indique con toda precisión la razón que lleva a tal decisión; máxime si los supuestos a los que se refiere el fundamento 49º de la STC N° 0987-2014-PA/TC, no son, dentro del contexto descrito, instrumentos de rechazo de plano del recurso de agravio constitucional, que, como tales, justifiquen su improcedencia, sino situaciones que,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 05068-2014-PA/TC

LIMA

COLEGIO ODONTOLOGICO

DEPARTAMENTAL DE PIURA

Representado por JUAN EDUARDO

MORALES LAZO - APODERADO

de presentarse, originan una sentencia interlocutoria denegatoria por carecer de sustento la pretensión contenida en la demanda, lo cual implica necesariamente entrar al examen del fondo del asunto.

8. Además, cualquier intento de descarga procesal no debe olvidar que cada caso es peculiar y merece un análisis propio, prolijo y detenido, para arribar a una decisión debidamente motivada y justa, ajena a facilismos y apresuramientos. Es una exigencia de cumplimiento ineludible en la excelsa función de administrar la justicia constitucional que tiene el Tribunal Constitucional, como garante final de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución, y como última y definitiva instancia en los procesos de la llamada jurisdicción de la libertad. Lo contrario colisiona con el principio de interdicción de la arbitrariedad.
9. Por lo demás, considero pertinente precisar que las causales de rechazo que contempla el precedente contenido en la STC N° 00987-2014-PA/TC* solo deben ser entendidas con un criterio eminentemente restrictivo. Esto es, como referidas única y exclusivamente a los cuatro supuestos que allí se consignan y siempre que aparezcan en forma indiscutible e indubitable. No así con un criterio de aplicación extensiva y, menos aún, a otros supuestos de desestimación de la pretensión.

El exceso incurrido y mi apartamiento de la forma de aplicación y extensión del precedente Vásquez Romero.

10. En este contexto, resulta un notable exceso pretender, como ya viene ocurriendo en una buena cantidad de casos, que la totalidad de causales de improcedencia de los procesos constitucionales previstas en el Código Procesal Constitucional (Cfr. artículos 4º, 5º y 7º, entre otros), sean subsumidas dentro de los supuestos establecidos en el citado precedente, pues éste último, lo enfatizo, fue concebido para casos muy excepcionales en los que no hubiese duda alguna sobre su encuadramiento en tales supuestos: para casos de notoria, indudable y grotesca improcedencia, que habilitaban la desestimación de la pretensión sin más trámite, de manera excepcional. No fue concebido con una finalidad laxa, amplia y genérica, ni habilitadora de otras situaciones; máxime si la decisión se emitiría sin más trámite. Se trató de una figura de aplicación excepcional. No de aplicación general. Y, lo aclaro, ese fue el motivo por el que acompañé la propuesta, que lamentablemente viene siendo desnaturalizada, como lo he explicado precedentemente.

* Carencia de fundamentación en la vulneración que se invoque, ausencia de trascendencia constitucional en la cuestión de derecho planteada, contradicción a un precedente vinculante emanado del Tribunal Constitucional y existencia de casos desestimatorios sustancialmente iguales.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	
OTDA	
FOJAS	9



EXP. N.º 05068-2014-PA/TC

LIMA

COLEGIO ODONTOLÓGICO

DEPARTAMENTAL DE PIURA

Representado por JUAN EDUARDO

MORALES LAZO - APODERADO

11. Las consideraciones descritas me llevan a sostener que, adicionalmente a mi discrepancia por el uso equivocado que se viene haciendo de la llamada sentencia interlocutoria denegatoria, tampoco puedo asumir como razonable y conforme a Derecho su aplicación indiscriminada, extensiva y generalizada a toda causal de improcedencia o de rechazo contemplada en el Código Procesal Constitucional, omitiendo el trámite de vista de la causa y sin oír a las partes. Ello lesiona el derecho de defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a la tutela procesal efectiva, entre otros, que están reconocidos en el artículo 139, incisos 14, 3 y 3 de la Constitución, respectivamente, en los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 4 del mismo Código Procesal Constitucional; derechos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado con amplitud en numerosas sentencias dictadas antes del precedente Vásquez Romero, como el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y sus parámetros de medición.
12. Frente a estas dos situaciones, la desnaturalización de la aplicación del precedente Vásquez Romero y su indebida extensión a todas las causales de improcedencia previstas en el Código Procesal Constitucional, he llegado a la firme convicción que debo dejar constancia de mi apartamiento de tales formas de entender y aplicar dicho precedente.

El sentido de mi voto.

Voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y admita nuevas pruebas si éstas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna, dejando aclarado que al no haberse emitido pronunciamiento sobre la pretensión, no puedo opinar por ahora sobre el fondo de la controversia, ya que la resolución de mayoría, lesionando los antes aludidos derechos de la parte demandante, se limita a declarar improcedente el recurso de agravio constitucional.

S.

BLUME FORTINI

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaria Relatora
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL